



ULISES
CARABANTES
AHUMADA

CHILE 1973

HISTORIA
DE UNA CRISIS

Cincuenta años del fin
de la larga agonía de una democracia.

SEKOTIA

ULISES CARABANTES AHUMADA

Chile 1973

Historia de una crisis

SEKOTIA

© ULISES CARABANTES AHUMADA, 2023

© EDITORIAL SEKOTIA, S. L., 2023

Primera edición: junio de 2023

Reservados todos los derechos. «No está permitida la reproducción total o parcial de este libro, ni su tratamiento informático, ni la transmisión de ninguna forma o por cualquier medio, ya sea mecánico, electrónico, por fotocopia, por registro u otros métodos, sin el permiso previo y por escrito de los titulares del *copyright*.»

Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.

EDITORIAL SEKOTIA • COLECCIÓN BIBLIOTECA DE HISTORIA

Editor: Humberto Perez-Tomé

Maquetación: Manuel Ortiz de Galisteo

www.sekotia.com

pedidos@almuzaralibros.com - info@almuzaralibros.com

Editorial Sekotia

Parque Logístico de Córdoba. Ctra. Palma del Río, km 4

C/8, Nave L2, nº 3. 14005 - Córdoba

Imprime: Romanyà Valls

ISBN: 978-84-18414-74-9

Depósito: CO-904-2023

Hecho e impreso en España - *Made and printed in Spain*

I. PALABRAS PRELIMINARES.....	11
II. LA RAÍZ DE UNA QUIEBRA INSTITUCIONAL.....	13
III. MOVIMIENTOS OBREROS, MARXISMO Y ANARQUISMO.....	17
IV. PARLAMENTARISMO Y UN 11 DE SEPTIEMBRE DE 1924.....	19
V. DESDE ALESSANDRI 1925 A ALESSANDRI 1932.....	29
VI. FRENTE POPULAR Y POST GUERRA.....	33
VII. FRENTE REVOLUCIONARIO DE ACCIÓN POPULAR, FRAP.....	37
VIII. LA VÍA INSURRECCIONAL DEL SOCIALISMO CHILENO.....	41
IX. CONGRESO DE LINARES 1965.....	45
X. CONGRESO DE CHILLÁN 1967. VÍA ARMADA SOCIALISTA.....	49
XI. MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA, MIR.....	51
XII. LA GUERRA FRÍA EN LATINOAMÉRICA.....	55
XIII. ALLENDE CANDIDATO SOCIALISTA Y LA UNIDAD POPULAR ...	57
XIV. EL TACNAZO.....	59
XV. PREDICCIÓN ELECTORAL HECHA POR LOS MILITARES.....	67
1970.....	71
XVI. SALVADOR ALLENDE CANDIDATO DE LA UNIDAD POPULAR ..	73
XVII. LOS MILITARES Y LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 1970.....	79
XVIII. EL MIR Y LA ELECCIÓN PRESIDENCIAL DE 1970.....	83
XIX. CONVULSIÓN Y DOCTRINA SCHNEIDER.....	89
XX. ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y SUS EFECTOS INMEDIATOS.....	93

XXI. ALLENDE PRESIDENTE. CONDICIONES DE UN COMIENZO.....	123
1971.....	135
XXII. REFORMA A LA CONSTITUCIÓN Y NACIONALISMO.....	137
XXIII. PRIMER DISCURSO AL CONGRESO NACIONAL	145
XXIV. ASESINATO DE EDMUNDO PÉREZ ZUJOVIC.....	155
XXV. DECRETO LEY 520 Y EXPROPIACIONES.....	163
XXVI. NACIONALIZACIÓN DEL COBRE	167
XXVII. PUGNAS Y ORGANIZACIÓN DE ACTORES ECONÓMICOS.....	169
XXVIII. PRIMER ANIVERSARIO DEL HOMICIDIO DE SCHNEIDER....	171
XXIX. VISITA DE FIDEL CASTRO Y VIOLENCIA EN LAS CALLES.....	173
XXX. GUERRA DE COMUNICADOS Y EXPRESIÓN CASTRENSE	181
XXXI. SITUACIÓN INTERNA EN EL EJÉRCITO	189
XXXII. PATRIA Y LIBERTAD ACENTÚA SU ACCIÓN SUBVERSIVA.....	193
XXXIII. ACUSACIÓN CONSTITUCIONAL A JOSÉ TOHÁ.....	195
1972	199
XXXIV. PERSPECTIVAS ECONÓMICAS DESALENTADORAS.....	201
XXXV. LA ITT Y LA DESESTABILIZACIÓN.....	205
XXXVI. VERANO DE 1972: CONVULSIÓN POLÍTICA Y MILITAR	209
XXXVII. LAS ÁREAS DE LA ECONOMÍA Y LA INCERTIDUMBRE.....	217
XXXVIII. DESCONFIANZA POLÍTICA Y MILITAR	223
XXXIX. DISCURSO DEL PRESIDENTE SALVADOR ALLENDE DE 24 DE JULIO DE 1972	227
XL. SUBVERSIÓN Y ANARQUÍA IZQUIERDISTA	231
XLI. IMPASE CON EL GOBIERNO ARGENTINO.....	233
XLII. CINCUENTA DÍAS PREVIOS AL GRAN PARO DE OCTUBRE	239
XLIII. PARO NACIONAL DE TRANSPORTISTAS Y OTROS GREMIOS .	247
XLIV. ANARQUÍA ECONÓMICA.....	263
XLV. ABANDONO DE LA UNIÓN SOVIÉTICA	267

XLVI. INICIO DE LA CAMPAÑA PARLAMENTARIA Y VIOLENCIA.....	271
1973	277
XLVII. NUEVO INTENTO POR CERTEZAS EN LA ECONOMÍA	279
XLVIII. DELIBERACIÓN MILITAR.....	293
XLIX. JUNTAS DE ABASTECIMIENTO Y CONTROL DE PRECIOS	297
L. VIOLENCIA Y ANARQUÍA ANTES DE LAS ELECCIONES	303
LI. FRENTE DE OPERACIONES DE PATRIA Y LIBERTAD	311
LII. ELECCIÓN PARLAMENTARIA DE MARZO DE 1973	317
LIII. LA ESCUELA NACIONAL UNIFICADA, ENU	321
LIV. PROYECTO SIERRA ALFA	329
LV. GIRA MILITAR Y GUERRA CIVIL A LA VISTA.	337
LVI. PUGNA DE PODERES Y CAOS.....	341
LVII. LA POLITIZACIÓN DEL GENERAL CARLOS PRATS	345
LVIII. TANCAZO: 29 DE JUNIO DE 1973	367
LIX. ALLENDE INSISTE CON LAS FUERZAS ARMADAS	379
LX. TENSIONES Y DESCONFIANZAS EN EL INTERIOR DEL EJÉRCITO.	383
LXI. NUEVO CAMBIO DE MINISTROS	387
LXII. FLUJOS DE INFORMACIÓN Y DECISIONES MILITARES	391
LXIII. INCLINACIÓN POR LA VIOLENCIA.....	397
LXIV. REACCIÓN MILITAR, POLÍTICA Y RELIGIOSA	407
LXV. PARO DE CAMIONEROS Y PRINCIPIO DEL FIN	415
LXVI. ASESINATO DEL COMANDANTE ARTURO ARAYA PETERS....	419
LXVII. NEGOCIACIÓN CON PATRICIO AYLWIN	423
LXVIII. NUEVAMENTE LOS MILITARES EN EL GOBIERNO	427
LXIX. PARO Y CONFLICTOS POLÍTICOS Y MILITARES	433
LXX. CÉSAR RUIZ DEJA LA FUERZA AÉREA	445
LXXI. RENUNCIA DE CARLOS PRATS.....	453
LXXII. ACUERDO DE LA CÁMARA DE DIPUTADOS.....	463

LXXIII. UNA DEMOCRACIA MUERTA.....	467
LXXIV. GOLPE MILITAR	471
REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA	503

I. PALABRAS PRELIMINARES

Esta obra la he terminado de escribir en noviembre de 2022; con la convicción y deseo de contribuir con un grano de arena a la verdad histórica respecto de sucesos vividos por Chile principalmente entre 1965 y la mañana del 11 de septiembre de 1973. Espero no equivocarme al buscar que dicha verdad histórica contribuya a pacificar los espíritus que después de medio siglo aún se aprecian inquietos, traumatizados, en ambos bandos de aquellos que se enfrentaron en 1973 y que dolorosamente estuvieron al borde de la guerra civil que podría haber costado a Chile un mínimo de quinientos mil muertos.

Espero desde el corazón que las próximas páginas sean leídas con un genuino espíritu de análisis, abandonando dogmas, figuras e ideas preestablecidas, es decir, que este libro sea leído dejando de lado ideologías y modelos que en definitiva dividen a los seres humanos, como ocurrió en Chile en el periodo de ocho años acotado por los años 1965 a 1973 y que impiden encontrar puntos de encuentro.

El proceso de investigación para dar forma a esta obra involucró muchas horas de lectura de testimonios que dejaron personajes centrales de aquella época, los cuales fueron leales colaboradores del presidente Salvador Allende, otros, atentos y silenciosos observadores de los sucesos y aquellos que manifestaban abiertamente en las palabras y sobretodo en la acción su voluntad de terminar, prematura, abrupta y violentamente con el Gobierno marxista que se había instalado en Chile a partir del 3 de noviembre de 1970. Esta investigación también implicó buscar y leer diarios y revistas de aquella época, encontrar y analizar discursos y mani-

fiestos que fueron marcando el devenir de la vida nacional. Una no corta conversación telefónica con el exdiputado y exsenador demócrata Ricardo Hormázabal sumó valiosa información. Lo mismo que contactar a un anciano de casi ochenta años, residente en Buenos Aires, constructor de historias dignas de una novela o de una película de suspense a principios de los años del 1970; como lo fue Roberto Thieme, secretario general del Frente Nacionalista *Patria y Libertad*, con quien nos sentamos a almorzar el segundo día de septiembre de 2022 en un restaurante en pleno centro de Santiago, para viajar en el tiempo y evocar cada detalle de decisiones y hechos que marcaron la historia de Chile.

Esta obra aborda una época políticamente en blanco y negro, sin colores intermedios, donde un grupo estaba en las antípodas del otro. He escrito las próximas líneas sin afán de levantar héroes, villanos ni mártires.

Los invito a leer con verdadera detención esta extensa obra, a analizar con un espíritu que permita superar traumas que se mantienen en muchos chilenos, de ambos bandos que estuvieron a punto de enfrentarse en una sangrienta guerra civil en 1973; guerra fratricida con quinientos mil muertos, que impidió finalmente una intervención militar no deseada por nadie, incluido los mismo militares.

Buena y productiva lectura.

El autor
Ulises Carabantes Ahumada

II. LA RAÍZ DE UNA QUIEBRA INSTITUCIONAL

Tras el triunfo de Eduardo Frei Montalva en la elección presidencial de 1964 fueron varios los factores que iniciaron los ocho años que he definido como periodo en el que la democracia chilena se fue erosionando paulatina e irremediabilmente, hasta convertirse en una tragedia donde todos eran ciegos y sordos, dando la impresión de una manada de caballos desbocados galopando hacia el abismo de una guerra civil o hacia una brusca interrupción de la vida política, como en definitiva ocurrió.

El primer escalón del desplome de la institucionalidad democrática chilena fue la derrota del candidato socialista Salvador Allende en la elección presidencial de 1964. Era su tercer intento de acceder al Palacio de La Moneda y concurría apoyado por el Frente de Acción Popular, FRAP, una agrupación de izquierda que aglutinaba como principales fuerzas políticas al Partido Socialista y al Partido Comunista. Dentro de la coalición de izquierdas, reinaba el optimismo, pues pensaban que podía triunfar sobre Eduardo Frei, democristiano, sobre Julio Durán Newman, candidato de la coalición de los partidos Conservador y Liberal, y sobre Jorge Prat Echaurren de la derecha nacionalista. Sin embargo, ante los resultados de una elección complementaria en marzo de 1964 en la que resultó vencedor el candidato del FRAP; los partidos Conservador y Liberal desahucieron a Durán y sin condiciones, entregaron sus esfuerzos electorales a Eduardo Frei.

Esta nueva derrota de Salvador Allende fue el detonante para que importantes sectores de la izquierda chilena comenzaran a cuestionar la democracia republicana como procedimiento para llegar a gobernar el país. En su lugar, tomó cuerpo la idea de la insurrección armada. El Partido Socialista, al que pertenecía el senador y eterno candidato Salvador Allende, se dejó seducir por esta posibilidad. Tal como expongo con más detalle a continuación.

En diciembre de 1963 falleció el diputado socialista de Curicó Oscar Naranjo Jara. Conforme con la Constitución de 1925 debía desarrollarse una elección de diputados, de carácter complementario, el 15 de marzo de 1964 para cubrir el escaño vacante. Concurrieron tres candidatos, que pertenecían a las tres corrientes políticas que competirían en la elección presidencial el 4 de septiembre del mismo año. Por lo tanto, aquella elección complementaria fue interpretada como una radiografía de las tendencias electorales seis meses antes de la elección de presidencial. Los candidatos en Curicó fueron el demócrata cristiano Mario Fuenzalida, el conservador Rodolfo Ramírez y el socialista, hijo del diputado fallecido, Óscar Naranjo Arias. Este último era el que en principio se veía con menos posibilidades, pues Curicó era un bastión electoral de los partidos de la derecha y de la Democracia Cristiana. De hecho, en las elecciones municipales del año anterior la alianza de la derecha con el Partido Radical había obtenido un 47 % de los votos y el partido Demócrata Cristiano había cosechado el 23 % de los sufragios.

Contra todo pronóstico, Óscar Naranjo Arias, del FRAP, se llevó el escaño con un 39 % de los votos; seguido por el conservador Rodolfo Ramírez con el 32 % de los sufragios y tercero fue el candidato de la Democracia Cristiana, Mario Fuenzalida, con un 27 %.

Este triunfo fue bautizado popularmente como El Naranjazo, denominación popular que combinaba lingüísticamente el apellido del ganador con el metafórico golpe dado con una naranja en los partidos liberal, conservador y democristiano.

Aquella elección encendió las alarmas en la derecha, pues se infirieron altas probabilidades de triunfo para Salvador Allende en las presidenciales de septiembre. Los partidos Conservador y Liberal, sin analizar el 47 % de los votos que habían obtenido en el conjunto de la

nación, retiraron su apoyo a Julio Durán y lo entregaron sin condiciones a Eduardo Frei; quien aseguró que dicho apoyo no le obligaba a cambiar ni en una coma el programa de su «revolución en libertad». El nacionalista Jorge Prat Echaurren retiró su candidatura.

Finalmente, el 4 de septiembre de 1964 se terminó la ilusión del FRAP y de su candidato Salvador Allende. La decisión de conservadores y liberales había dado la presidencia a Eduardo Frei, por una aplastante mayoría absoluta.

El resultado electoral de septiembre de 1964 golpeó duramente a la izquierda que había apoyado una vez más las pretensiones presidenciales de Salvador Allende. Es posible que la máxima expresión de aquello fuesen las palabras del senador socialista Aniceto Rodríguez Arenas, quien en 1965 afirmó que «negarían la sal y el agua», al Gobierno. Pero lo más complejo estaba por llegar. (48) (49)

III. MOVIMIENTOS OBREROS, MARXISMO Y ANARQUISMO

Es preciso conocer un poco más el pasado y para entender lo acaecido en Chile durante los años del 1960 y del 1970; en particular, el origen de los movimientos y partidos marxistas y anarquistas. Debemos trasladarnos a los inicios del siglo XX, cuando quien dominaba gran parte del mundo era el Imperio británico y el dólar no había reemplazado a la libra esterlina en el comercio internacional.

Los movimientos y partidos marxistas y anarquistas surgieron de una escisión del Partido Demócrata, quien, a su vez había separado del Partido Radical en 1887. Algunos descontentos del Partido Demócrata, se agruparon en Iquique en 1912 y fundaron el Partido Socialista Obrero de Chile, cuyo primer líder sería Luis Emilio Recabarren. Se trataba de una formación marxista de la que emergería, más tarde, el Partido Comunista de Chile, cuando el señalado P. S. O. de Chile se adhirió, en 1922, a la Internacional Comunista.

Casi en paralelo, en 1909, se fundó la Gran Federación Obrera de Chile; en medio de un conflicto de los obreros ferroviarios, por el descuento de un 10 % de sus ingresos que la Compañía de Ferrocarriles del Estado aplicó a sus trabajadores. Los obreros ferroviarios se querellaron judicialmente con el Estado, pleito en el que fueron asesorados por el abogado Pablo Marín Pinuer, quien, además, gestionó la personalidad jurídica de la Gran Federación Obrera de Chile y la obtuvo el 11 de septiembre de 1912.

En 1919 el abogado Marín logró la devolución del dinero que se había descontado a los trabajadores ferroviarios. Este episodio, que dio origen a la Gran Federación Obrera de Chile, dejó dos interesantes cuestiones dignas de reflexión: en primer lugar, por aquellos años era posible que una organización de trabajadores triunfara con demandas legales y, en segundo término, era posible que una organización obrera obtuviera el reconocimiento jurídico del Estado. Y esto ocurría en Chile antes de la revolución bolchevique en Rusia. En 1922 la Gran Federación Obrera de Chile pasó a llamarse Federación Obrera de Chile, FOCH.

Aquellas dos primeras décadas del siglo XX fueron una época agitada que combinaban el desgobierno, propiciado por un parlamentarismo estrecho de miras que se había asentado en Chile tras guerra civil de 1891, y los conflictos socio laborales derivados de las condiciones en que vivía la mayoría de los chilenos, cuya máxima expresión eran el analfabetismo y la desnutrición. (50) (51)

IV. PARLAMENTARISMO Y UN 11 DE SEPTIEMBRE DE 1924

En septiembre de 1924 explotó el creciente desencuentro entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, era presidente de la república el liberal Arturo Alessandri Palma. La crisis se llevaría por delante un régimen de inoperante parlamentarismo que se había establecido en Chile en 1891, tras una guerra civil en la que las fuerzas del Congreso Nacional triunfaron sobre las del presidente José Manuel Balmaceda. Expliquémoslo brevemente.

El Congreso Nacional se levantó contra el Gobierno, no por el estilo de gobierno del presidente, sino por la visión de José Manuel Balmaceda sobre el papel que en Chile debía desempeñar la industria del salitre.

El presidente Balmaceda se ganó la enemistad del empresario británico John North, llamado el Rey del Salitre, quién hizo uso de la red de contactos que tenía entre los políticos chilenos y utilizando su enorme fortuna, ganó aliados dentro del Congreso Nacional, incluso entre personas que en un principio habían sido de confianza del presidente.

Estaba vigente la Constitución de 1833 que otorgaba gran poder al presidente de la República, sin embargo, había dos herramientas concretas con las que contaba el Congreso para obligar a ceder al Ejecutivo: la acusación constitucional a los ministros del Gabinete del Gobierno y la no aprobación del presupuesto de la nación. Estas dos herramientas, útiles para mantener el equilibrio entre ambos poderes. Ambas

fueron utilizadas por el Congreso durante el gobierno de José Manuel Balmaceda, de manera que se sucedieron una tras otra las acusaciones constitucionales en contra de los ministros de Estado, y el presidente se vio obligado a reemplazar a sus equipos de confianza ante la recusación de cada uno de sus integrantes. Pero la gota que rebasó el vaso fue que, a fines de 1890, el Congreso se negó a aprobar la ley que definía el tamaño de las fuerzas de tierra y mar y la ley del presupuesto de la nación para el año 1891.

El presidente, para evitar que el Ejecutivo se quedara sin recursos, el 1 de enero de 1891 prorrogó mediante decreto el presupuesto del año 1890 para el año que comenzaba y que era el último del lustro constitucional en que le correspondía a Balmaceda ejercer la Presidencia de la República.

El Congreso por su parte, el 6 de enero de 1891, declaró al presidente fuera de la ley y el vicepresidente del Senado, Waldo Silva, y presidente de la Cámara de Diputados, Ramón Barros Luco, a bordo de la escuadra que mandaba del capitán de navío Jorge Montt Álvarez, emitieron la proclama denominada *Manifiesto de los Representantes del Congreso a bordo de la Escuadra*. Balmaceda respondió con una proclama pública el 7 de enero de 1891 y con la clausura del Congreso Nacional a partir del 11 de febrero del mismo año.

La Armada se alineó mayoritariamente con el Congreso y casi todo el Ejército, por el contrario, se mantuvo subordinado al presidente Balmaceda con sus cuatro divisiones, ubicadas cada una en las provincias de Coquimbo, Valparaíso, Santiago y Concepción. Se habían creado las condiciones para que se desatara una guerra civil, la que terminó con la derrota de los balmacedistas en la batalla de Placilla, en la zona alta de Valparaíso. El presidente rindió su cargo al general Manuel Baquedano y se refugió en la embajada de Argentina en Santiago. Esperó Balmaceda a que terminara su mandato constitucional con fecha 18 de septiembre de 1891 y al día siguiente se quitó la vida con un disparo en la sien.

La Constitución, presidencialista de 1833, se mantuvo una vez terminada la guerra; pero se entendió que aquellas herramientas constitucionales que usó el Congreso para combatir al gobierno de Balmaceda debían ser utilizadas para constituir cada gobierno de turno. Una vez

acabado el conflicto, cada presidente, buscando evitar la repetición del enfrentamiento, delegó la formación de su gabinete en las mayorías parlamentarias que cambiaban con las circunstancias de cada momento.

El colectivo político no quiso reconocer que la causa de la guerra civil había sido el complot de John North y acusó de la misma al presidencialismo de la Constitución de 1833. Muerto Balmaceda, Chile podría haber regresado al esquema de Gobierno que había tenido por casi sesenta años, pero por falta de sinceridad política, se le adjudicó la responsabilidad de la guerra al texto constitucional, en lugar de reconocer la mala conducta de los políticos.

De esta manera se pasó del presidencialismo al parlamentarismo, a una situación en la que el presidente de la república prescindía de la atribución que tenía para formar gobierno, se comportaba en la práctica como un jefe de Estado poco menos que ornamental, y la jefatura de Gobierno recaía en el ministro de Interior cuyo nombramiento estaba sujeto a las variables alianzas e intrigas del Congreso Nacional.

Así se llegó a la última administración dentro de esta particular forma de gobernar o de desgobernar Chile, al que fue también el último Gobierno bajo la Constitución de 1833; encabezado por el abogado liberal Arturo Alessandri Palma, el León de Tarapacá, quien había iniciado su mandato en 1920. Durante el periodo de Alessandri el sistema desarrollado por los políticos se encontraba muy desprestigiado; pues mantenía al país en un permanente estado de ingobernabilidad sometido a los caprichos, intrigas y bajezas de senadores y diputados, lo que trajo como consecuencia la existencia de un Estado incapaz de solucionar los apremiantes problemas sociales y económicos que aquejaban al país, problemas que se podían condensar en tres palabras: «la cuestión social».

Arturo Alessandri Palma inició su Gobierno el 23 de diciembre de 1920; mandato que expiraría el 23 de diciembre de 1925. Pero la historia cambió su rumbo el año 1924. Alessandri no pudo completar su mandato. El desorden y la anarquía en el Congreso Nacional alcanzaban máximos históricos. Baste constatar que en cuarenta y cuatro meses de Gobierno, el presidente Alessandri tuvo diecisiete ministros del Interior, es decir, cada uno de estos ministros duró algo más de dos meses y medio como promedio. En el caso del Ministerio de Hacienda,

responsable de las políticas públicas y de los recursos financieros, también tuvo diecisiete titulares en los mismos cuarenta y cuatro meses. Es decir, se podría decir que la estabilidad del gabinete ministerial dependía si había amanecido con sol o nublado y si esto era o no del agrado de los políticos en el Congreso. ¿Quién podía gobernar adecuadamente así?

Como la intriga y la irresponsabilidad era una conducta cotidiana de los políticos arrellanados en los cómodos sillones del Congreso, hubo proyectos de ley enviados por el Gobierno de Alessandri que permanecieron meses olvidados por los desvergonzados congresistas, la mayoría de ellos destinados a abordar la llamada «cuestión social». Entre los proyectos olvidados en los cajones de las oficinas de senadores y diputados estaban el que daría vida legal a los sindicatos, el que reglamentaba el contrato colectivo, el que terminaba con el trabajo infantil, el que creaba la jornada laboral de ocho horas, aquel que creaba los tribunales de conciliación y arbitraje laboral, el que abordaba lo concerniente a accidentes en el trabajo y seguro obrero, entre otros. Pero, sus señorías, además de entretenerse con sus intrigas para instalar y derribar ministros de Estado, sí encontraron tiempo para aprobar, en corto plazo, una ley que beneficiaba sus propios bolsillos. Los proyectos de ley que beneficiaban a una gran cantidad de trabajadores chilenos podían esperar, destinar dineros en beneficio propio tenía prioridad.

El 13 de mayo de 1924 la Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que, a pesar de la gratuidad del cargo de parlamentario, permitiría que los congresistas pudieran percibir gastos de representación o dietas parlamentarias. El 3 de septiembre, el Senado aprobó definitivamente el proyecto y esto hizo estallar el descontento reprimido.

Avivaron la crisis varios factores: la postergación de las leyes que abordaban la llamada «cuestión social», las posibles influencias socialistas en la oficialidad joven del Ejército, las demandas profesionales castrenses que estaban insatisfechas. Lo cierto es que al día siguiente de la sesión en la que el Senado aprobó la dieta parlamentaria, jóvenes oficiales del Ejército corrieron a situarse en las galerías del Senado para golpear contra el piso con la punta de sus envainados sables, como expresión de malestar por la ley de asignación económica aprobada el día anterior en el Congreso, y también como apoyo a la agenda

social del Gobierno del presidente Arturo Alessandri. Aquel «ruido de sables», sería el preludio de la instalación castrense en La Moneda. Y era el inicio del fin de la *dolce vita* de los políticos en el Congreso.

El 5 de septiembre de 1924 se constituyó un comité militar que acudió al Palacio de La Moneda a manifestar su descontento al presidente. Alessandri, sin tener las herramientas ni atribuciones para influir en el Poder Legislativo, se comprometió a solucionar los problemas que los militares le plantearon, con la condición de que estos volvieran a sus cuarteles. Estos aparentemente aceptaron, pero ya habían tomado una decisión.

Con la presión ejercida por el comité militar, en la sesión del 8 al 9 de septiembre de 1924, el Congreso aprobó todas las leyes que había tenido dormidas durante años. A pesar de lo cual, el comité militar continuó funcionando y el 9 de septiembre solicitó al presidente Arturo Alessandri que disolviera el Congreso. Alessandri no quiso tomar ese camino y prefirió renunciar. Colocado entre la presión militar y la farsa de democracia republicana, optó por mantener el Congreso que había entorpecido su mandato. La quiebra institucional que se arrastraba desde hacía años desembocaba en aquel comité militar que se arrogaba la atribución de solicitar al presidente la disolución del Congreso y de aceptar o no la renuncia del presidente de la República, pues cuando Alessandri, con fecha 9 de septiembre de 1924 presentó la renuncia, el comité militar no se la aceptó y, en cambio, le otorgó una licencia de seis meses para que se ausentara del país.

Al final no fueron los jóvenes oficiales los que asumieron el Gobierno. El día 11 de septiembre de 1924 se instaló una junta militar en La Moneda, integrada por los altos mandos de las Fuerzas Armadas, que contaron con el apoyo de políticos de la Unión Nacional, coalición opositora a Arturo Alessandri y partidaria de mantener el parlamentarismo. Formaron gobierno el inspector general del Ejército, general de división Luis Altamirano Talavera, el director general de la Armada, vicealmirante Francisco Nef Jara y el general de división Juan Pablo Bennett Argandoña, que fue ministro de Guerra del presidente Arturo Alessandri.

La junta militar emitió un manifiesto el mismo 11 de septiembre de 1924 para todo Chile, y el comité militar una circular interna para las

instituciones armadas, donde se llamaba a la disciplina y subordinación al nuevo Gobierno encabezado por el general Altamirano.

La junta militar (los viejos soldados) no se instaló en La Moneda para continuar con los cambios que demandaba el comité militar (los jóvenes soldados), sino para llamar a nuevas elecciones presidenciales, lo que contradecía su propio manifiesto del 11 de septiembre de 1924; pues sostenían que, en primer lugar, debía ser reformada la Constitución y solo posteriormente convocar a elecciones. No cumplir con este itinerario propiciaría la continuación de los vicios que hasta esa fecha habían demostrado los políticos. Nuevamente se buscaba un falso culpable de los problemas de Chile. Estos no terminarían con el cambio de hombre en la Presidencia, la raíz estaba en la conducta irresponsable del Congreso, realidad que se buscaba soslayar con una nueva elección presidencial.

Los oficiales jóvenes del comité militar actuaban de forma independiente y se arrogaban la facultad de evaluar los pasos que daban los generales y el almirante en la Junta de Gobierno, eran un poder paralelo. Este comité militar estaba integrado entre otros por el mayor Carlos Ibáñez del Campo del arma de caballería y el mayor Marmaduke Grove, del arma de artillería, quien estaba destinado como profesor en la escuela militar y a quien se le identificaba como el alma del movimiento revolucionario. Era evidente la divergencia entre oficiales como Ibáñez y Grove con la alta cúpula militar que maniobraba con la Unión Nacional buscando mantener las cosas como estaban desde 1891. A la actitud vigilante del comité militar es necesario sumar las acciones desestabilizadoras que intentó el Partido Comunista, quien, utópicamente, veía en la situación que se vivía como la oportunidad para reproducir en Chile la Revolución bolchevique de Rusia. Estos intentos del comunismo fueron rápida y enérgicamente controlados por el Gobierno. La opinión pública, por su parte, era favorable a tener un Poder Ejecutivo decidido, consciente de su papel y obligaciones, sin los vicios que durante tres décadas habían demostrado los políticos.

En el plan diseñado entre la junta militar y la Unión Nacional, uno de los líderes de esta agrupación partidista, Ladislao Errázuriz Lazcano, organizó una convención antiliberal alessandrista. El objeto de la Convención era proclamar un candidato a la Presidencia de la República.

Todo estaba muy bien calculado, pues el mismo Errázuriz Lazcano resultó elegido candidato a la Presidencia. A pesar de lo declarado por la junta en su *Manifiesto del 11 de septiembre de 1924*; parecía que comenzaba a organizarse todo para que nada cambiara después de la salida de Alessandri. Tras las protestas de los militares en el Senado y en La Moneda, se volvería al estado de ingobernabilidad preexistente, con un presidente decorativo, sujeto a las decisiones antojadizas del Congreso, con el consecuente daño para los chilenos. Pero el comité militar no estaba para aceptar ese tipo de maniobras. Comenzaron aquellos oficiales de Ejército a planificar el final de la Junta de Gobierno. Chile vivía sobrecargado de agitación social, amenazas y huelgas que auguraban una revolución social o un motín militar para impedir que el candidato Errázuriz Lazcano terminara sentado en La Moneda. A nadie sorprendió por lo tanto que el 23 de enero de 1925 estallara en Santiago un motín, cuyos líderes, integrantes del comité militar, se apoderaron de La Moneda y tomaron prisioneros a los miembros de la Junta de Gobierno y sus más cercanos colaboradores. Entre los prisioneros estaban los prestigiosos jefes navales, vicealmirante Francisco Nef Jara y vicealmirante Luis Gómez Carreño. Esta situación derivó en que el consejo naval desconociera la autoridad del comité militar, autodenominado a partir de aquel 23 de enero como Gobierno revolucionario. De nuevo se encendían las alarmas de una guerra civil; volvía a tomar forma y fuerza la postura regeneracionista que movió a los oficiales a hacer sonar sus sables en el Senado y que se expresó en el *Manifiesto del 11 de septiembre de 1924*.

Este golpe llevó a la Marina a un estado de alerta tal, que era posible que en cualquier momento se produjese un enfrentamiento con el Ejército, y nuevamente llevase a Chile al conflicto interno. El legendario acorazado Almirante Latorre fondeó en la bahía de Valparaíso para bombardear la vía férrea Valparaíso-Santiago.

Además de la respuesta del por qué los militares hubieran apresado a dos altos jefes navales, la Armada también defendía el legado de la revolución que lideró en 1891: el parlamentarismo. Y la candidatura de Ladislao Errázuriz aseguraba la continuidad del sistema.

Esta situación de guerra inminente fue superada gracias a la labor mediadora del político, diplomático y empresario Agustín Edwards

Mac-Clure, quien logró poner de acuerdo al comité militar y al consejo naval, para hacer regresar de Roma al presidente Alessandri y que este encabezara la redacción, aprobación y promulgación de una nueva Constitución. Con este paso se cumplía la promesa de la Junta de Gobierno en el manifiesto del 11 de septiembre de 1924: terminar con la Constitución de 1833 y la anarquía parlamentaria, por lo menos aquella que nació tras la guerra civil de 1891.

Arturo Alessandri Palma volvió a la presidencia el 12 de marzo de 1925. Para evitar que la revolución se volviera a desvirtuar, el ahora teniente coronel Carlos Ibáñez del Campo fue ministro de Guerra. Alessandri, que antes gobernó bajo la tutela y control de los irresponsables congresistas, ahora ejercía la Presidencia de la República bajo el control de los militares revolucionarios, que en la práctica, también habían trastornado las jerarquías del Ejército, pues en esos momentos, un teniente coronel tenía más autoridad que un general.

Alessandri trabajó en la promulgación de una nueva Constitución por medio de una comisión consultiva integrada por ciento veintidós personas convocadas por el presidente de la República. Fue aprobado el texto constitucional final en el mes de Julio de 1925; documento que consagraba a Chile como un Estado unitario, cuyo Gobierno era republicano y democrático representativo. Se fortaleció el presidencialismo por medio de entregar al presidente de la República la exclusividad en lo que se refiere a iniciativa legislativa para impulsar los proyectos de ley y también al reglamentar la tramitación de la ley de presupuesto, en el que se daba al Congreso un plazo fijo para su aprobación, después del cual, de no haber pronunciamiento por parte del Poder Legislativo, sería considerado como presupuesto anual el diseñado y enviado al Congreso por parte del Poder Ejecutivo.

Se convocó a plebiscito para el 30 de agosto de 1925. La nueva Constitución tuvo la férrea oposición de los comunistas, quienes soñaban con realizar en Chile una revolución similar a la de Rusia. También se opusieron a la nueva carta fundamental conservadores y algunos liberales, nostálgicos del régimen parlamentario que terminaba.

El día de la votación se entregó a cada elector tres papeletas, una de color rojo, otra de color azul y una tercera de color blanco. En la papeleta de color rojo se podía leer: «acepto el proyecto de Constitución

presentado por el presidente de la República sin modificación». En la papeleta de color azul el texto era: «acepto el proyecto de Constitución, pero con régimen parlamentario y la consiguiente facultad de censurar ministerios y postergar la discusión y despacho de la ley de presupuesto y recurso del Estado». Por último, en la de color blanco, el texto era «rechazo todo proyecto».

La cédula roja obtuvo 127.483 votos equivalente al 94,84 % de los votos emitidos, votos alessandristas e ibañistas. La cédula azul obtuvo 5448 votos, equivalentes al 4,05 % de los votos emitidos, votos conservadores y liberales descolgados del alessandrismo y la cédula blanca obtuvo 1490 votos, equivalente al 1,11 % de los votos emitidos, los que eran votos comunistas.

Quedó aprobada la nueva Constitución Política de la República de Chile, que fue promulgada el 18 de septiembre de 1925 y entró en vigor un mes después, el 18 de octubre. Con la promulgación de la Constitución de 1925 quedó establecido el marco institucional dentro del cual se desenvolvería Chile por el siguiente medio siglo, incluyendo por cierto el periodo de la gran crisis de la década de 1970 (1) (5) (6) (8).

V. DESDE ALESSANDRI 1925 A ALESSANDRI 1932

Carlos Ibáñez, que había ascendido dos grados militares entre 1924 y marzo de 1925 y ya estaba convertido en coronel, quiso presentar su candidatura presidencial para suceder a Alessandri, pero se encontró con una decidida oposición de la Armada. Emiliano Figueroa fue finalmente un candidato de consenso. El coronel Ibáñez debería esperar otro momento para ganar las elecciones.

A pesar de la nueva Constitución, la inestabilidad política se mantenía en Chile y la influencia del coronel Ibáñez fue en aumento: ocupó cargos claramente civiles como el de ministro del Interior en el Gobierno de Emiliano Figueroa Larraín, situación que vino a recordar la época del parlamentarismo pues el ministro del Interior Ibáñez era el poder en la sombra, y llegó, incluso, a mandar al exilio al hermano del presidente, Javier Ángel Figueroa. Esta decisión de Ibáñez hizo caer el Gobierno, pues el presidente renunció a su cargo. Era el escenario perfecto para que Ibáñez volviera a aspirar al sillón presidencial. Esta vez la Marina no se opuso y, finalmente, Carlos Ibáñez ganó la elección presidencial del 22 de mayo de 1927. Cuando era, al mismo tiempo, jefe del Poder Ejecutivo, con el cargo de vicepresidente que había asumido el 7 de abril del mismo año.

Carlos Ibáñez gobernó con un estilo autoritario, que bordeaba con la dictadura desde el 21 de julio de 1927 hasta el 26 de julio de 1931;

fecha en que fue abandonado por sus ministros. Tuvo que entregar el Gobierno, saliendo de Chile para retornar seis años después.

Después de la caída de Ibáñez, en medio de una de las mayores crisis económicas chilenas y mundiales, vino un periodo de bancarrota y anarquía en la República. Uno de los hitos de este periodo de inestabilidad económica, política y social fue el amotinamiento de la marinería de la escuadra fondeada en el puerto de Coquimbo. El alzamiento en un principio tuvo un perfil gremial ocasionado por la ostensible reducción de sueldos del sector público, donde están incluidos los uniformados; pero después fue tomando ribetes que indujeron a pensar que se habían infiltrado grupos anarquistas y comunistas. Este episodio se cerró con una escaramuza aeronaval en la bahía de Coquimbo y un rudo enfrentamiento entre tropas del Regimiento Chacabuco de Concepción y los marinos de Talcahuano, que se habían sumado al levantamiento de la marinería de la Escuadra en el norte.

Este periodo post Arturo Alessandri 1925 y pre Arturo Alessandri 1932 estuvo marcado por la crisis política: diecisiete presidentes, caudillos, golpes de Estado, dos cierres del Congreso Nacional y tal cantidad de ministros que podrían ponerse en fila desde Arica a Punta Arenas. Se tuvo en Chile una República Socialista, auténtica caricatura de revolución, que llegó a La Moneda el 4 de junio de 1932 después de derrocar por un golpe cívico militar a Juan Esteban Montero, el primer presidente que tuvo el Partido Radical. Volvieron a aparecer juntos en un movimiento político militar los caudillos Marmaduke Grove y Carlos Ibáñez, este último en el exilio, pero representado por Carlos Dávila; con ellos formaba triunvirato el abogado masón Eugenio Matte Hurtado, que lideraba a distintas corrientes de jóvenes socialistas. Entre los tres pensaban impulsar este novedoso experimento: el caudillismo militar de Grove, el izquierdismo socialista de Matte y el populismo izquierdista de Ibáñez, tal vez con influencias del fascismo italiano.

Se trató de una alianza que no podía durar mucho tiempo. Se constituyó una Junta de Gobierno integrada por el general Álvaro Puga, Eugenio Matte y Carlos Dávila. Para Grove quedó reservado el cargo de ministro de Defensa. Pero no pocas veces las ambiciones provocan rupturas en todo orden de cosas y las alianzas entre primos hermanos

no escapan a esto. El 16 de junio de 1932 los sectores ibañistas expulsaron del Gobierno a Grove y Matte, los apresaron y los embarcaron hacia la Isla de Pascua. Carlos Dávila apoyado por el Ejército se quedó solo con el trofeo, e instaló un embrión de dictadura. Decretó el estado de sitio, censuró la prensa y desarrolló políticas económicas estatistas para combatir la gran crisis económica y social. Pero este experimento tampoco podía durar mucho. Al final, Dávila se quedó sin apoyo en el mundo castrense y en la sociedad civil. Los comunistas y federaciones obreras nunca apoyaron la llamada República Socialista de Chile por considerarla militarista; los socialistas y gran parte del mundo militar fueron alejados con el destierro de Matte y Grove, y ni los sectores conservadores y liberales, ni los empresarios iban a prestar su apoyo a esta quijotada. Carlos Dávila abandonó La Moneda el 13 de septiembre de 1932. Faltaban aún dos décadas para que el ibañismo fuera una verdadera alternativa de gobierno en la vida política chilena.

Asumió el Poder Ejecutivo el general Bartolomé Blanche, quien al poco tiempo debió dimitir por un alzamiento social que pedía un Gobierno civil. Ante la renuncia de Blanche ocupó la Presidencia el civil Abraham Oyanedel quien convocó a elecciones presidenciales y parlamentarias. Y así, el 24 de diciembre de 1932, Chile inauguró el primer sexenio de aquella democracia que duraría cuatro décadas. Por una simetría de la historia, ocupaba nuevamente el Palacio de La Moneda el liberal Arturo Alessandri Palma. (4) (26) (52)